

Consideramos que incluir el requisito de que el objetivo del uso de la fuerza sea “legítimo” sólo producirá incerteza en el actuar de las policías y un espacio demasiado amplio para que los jueces evalúen con su propia opinión de lo que es legítimo o no el actuar de los funcionarios.

La legitimidad no es un concepto jurídico, sino que supra jurídico o incluso sociológico que alude a la valoración positiva que hacen las personas que tienen que seguir reglas jurídicas de la autoridad que tienen quienes las imponen. Pero en un Estado de Derecho, excepto ante una dictadura, las personas están obligadas a cumplir las leyes aún cuando las consideren ilegítimas y eso incluye a los jueces que tienen que aplicarlas.

Es verdad que algunos instrumentos internacionales hacen referencia al “objetivo legítimo”, pero cuando el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre uso de la fuerza policial explica este requisito en su informe del 2014 sólo señala que el único objetivo legítimo para el uso de la fuerza letal es la defensa de la vida. De igual manera, en las Orientaciones de 2018 de la ONU sobre empleo de armas menos letales se describe este principio como “objetivos legítimos de aplicación de la ley”, entre los que se encontraría el combate a la violencia, la prevención de un delito, la detención de un sospechoso de cometerlo y el encarcelamiento del delincuente para cumplir una condena.

Como puede verse, el objetivo legítimo de aplicación de la ley es idéntico al cumplimiento del principio de legalidad en las actuaciones administrativas o judiciales que las policías deben cumplir, como, por ejemplo: un allanamiento, un desalojo, el arresto o la dispersión de una manifestación violenta.

Por este motivo, en nuestras indicaciones individualizadas en el comparado con los números 34, 125 y 140 hemos puesto expresamente que la fuerza se debe usar de forma necesaria y proporcional para alcanzar el objetivo de la actuación “concreta”, porque sí estimamos que la fuerza tiene un fin jurídico que se lo da la ley, nosotros los legisladores, cuando regulamos actuaciones policiales.

Por último, sólo mencionar que el objetivo legítimo tampoco es un requisito expresamente contemplado por todos los organismos internacionales que tienen competencia en la materia. Así, por ejemplo, las Orientaciones de 2015 de Amnistía Internacional para implementar los principios de la ONU sobre uso de la fuerza sólo contemplan la legalidad, proporcionalidad, necesidad y responsabilidad. De igual manera, el documento denominado “El uso de la fuerza en operaciones para hacer cumplir la ley” de la Cruz Roja Internacional, de 2023, contempla sólo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad, haciendo referencia al objetivo sólo al referirse en los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo proponemos en nuestras indicaciones.

INTERVENCIÓN EN SALA PROYECTO DE LEY NARCOFUNERALES

Para muchos, la idea de regular los funerales de alto riesgo les ha parecido contraproducente, pero no hay que quedarse con los titulares, sino que revisar el mérito del proyecto y las mejores que se han hecho respecto a lo que venía de la Cámara.

La idea del proyecto es disminuir al máximo los riesgos a la seguridad pública que pueden presentarse en funerales de personas que por sus antecedentes o circunstancias de muerte. Sin perjuicio que el proyecto venía con un agravamiento de penas para delitos cometidos en el contexto de estos funerales, en la Comisión pusimos especial énfasis en las medidas preventivas, ya que lo que nos interesa es que nunca más se vuelvan a suspender clases, cerrar barrios enteros y atemorizar a vecinos por este tipo de manifestaciones delictuales.

Las principales medidas que la Comisión propone son, a mi entender, las siguientes:

1) Hemos agilizado al máximo todo el procedimiento administrativo de declaración del funeral de alto riesgo, de otorgamiento del pase de sepultación por el Registro Civil, los eventuales trámites en el Servicio Médico Legal y la inhumación misma. El objetivo es que todo el proceso funerario se realice en menos de 24 horas desde que se notifica la resolución del Delegado, la que incluso puede notificarse por correo electrónico.

2) Le hemos dado expresamente a Carabineros la facultad de dirigir el traslado del cadáver, de realizar controles de identidad, impedir que ingresen personas bajo la influencia del alcohol y drogas e incluso impedir el porte de elementos que puedan usarse para alterar la tranquilidad del proceso. En esto, seguimos de cerca la normativa vigente de la ley sobre violencia en los estadios.

3) Por último, si la amenaza de sanciones no fuera suficiente, añadimos la facultad que el Delegado ejecute directamente la sepultura o cremación del fallecido si los familiares obligados a inhumarlo no cumplen con el plazo de 24 horas, lo que será llevado a cabo mediante funcionarios del Servicio Médico Legal.

El objetivo de todos nosotros debe ser que el Estado demuestre en los hechos que tiene el control para impedir que delincuentes interrumpen clases, pongan en peligro la comunidad y campeen precisamente en los barrios que más sufren el crimen. Con este proyecto estamos dando a la vez una señal y herramientas efectivas para que el Estado recupere las calles. Por estos motivos, llamo a aprobar la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública.